

The logo for CAT (Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d'Esquadra) features the letters 'CAT' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a red square background that is partially overlaid by a black triangle in the bottom-left corner.

COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

**RECURS GUANYAT EN PRIMERA
INSTÀNCIA I RATIFICAT EN
APEL·LACIÓ CONTRA EXPEDIENT
DISCIPLINARI**

Davant la injusta proposta de sanció disciplinària imposada per Afers Interns des dels serveis jurídics del CAT vàrem presentar recurs al jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona.

En sentència núm. 134/2010 se'ns ha donat la raó considerant que **el principi de presumpció d'innocència del dret penal també és d'aplicació al règim disciplinari.**

L'Administració va apel·lar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya però de nou **la Sala de lo Contenciós Administratiu del TSJC va ratificar que el nostre representat se li havia vulnerat la presumpció d'innocència** segons sentència 633/2011.

Gràcies per confiar en els serveis jurídics del CAT, junts defensem el que ens pertoca per llei i dret.

Serveis Jurídics del CAT-ME

Octubre, 2011



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 31/03/2010 el Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Barcelona, en el Procedimiento Abreviado seguido con el número 230/2008, dictó Sentencia estimatoria del recurso interpuesto contra la Resolución del Director General de Policía de 20-3-08 por la que se le impone una sanción disciplinaria. Sin expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección.

TERCERO.- Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2011.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo al estudio de la cuestión de fondo, conviene recordar, con cita de la jurisprudencia establecida, entre otras, en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993, 26 de octubre de 1998 y 15 de diciembre de 1998, que:

a) La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica razonada y articulada de la sentencia o auto apelado, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. Es decir, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos vertidos en la instancia con la finalidad de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una Sentencia o auto a su favor.



b) En el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia o auto apelados al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria; por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengán ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia.

c) El recurso de apelación autoriza al Tribunal "ad quem" a revisar la valoración probatoria del Juez "a quo", pero el hecho de que la apreciación por éste lo sea de pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, determina por regla general, que la valoración probatoria realizada por el Juez de instancia, a quien legalmente le corresponde la apreciación de las pruebas practicadas, debe respetarse en la alzada, con la única excepción de que la conclusión probatoria de que se trate carezca de apoyo en el conjunto probatorio practicado, o bien de que las diligencias de prueba hayan sido practicadas defectuosamente, entendiéndose por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente apreciable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea, esto es, cuya valoración se revele como equivocada, sin esfuerzo.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, la cuestión objeto de debate viene determinada por la pretensión del recurrente, miembro del Cos de Mossos d'Esquadra, de que se deje sin efecto la Resolución administrativa por la que se le imponía sanción disciplinaria como autor de una falta grave.

Llegados a este punto, y como antes se ha expuesto en el Fundamento Jurídica Primero, letra b), con referencia a no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, debe hacerse constar que la misión de esta Sala no es la de llevar a cabo un segundo juicio sobre la cuestión objeto de debate, sino la de examinar y analizar la valoración que el Juez "a quo" ha llevado a cabo sobre la actividad probatoria practicada, y si la conclusión a la que ha llegado se halla o no ajustada a Derecho y a la resultancia de dicha prueba, y en tal sentido, y



Tras el oportuno estudio, se llega a la conclusión de que la Sala, en el caso presente, debe compartir el criterio que se establece en la sentencia apelada, cuyos fundamentos son asumidos en la presente por su ajuste a Derecho, pues no debe olvidarse que los principios inspiradores del proceso penal son plenamente aplicables al procedimiento sancionador, ya que ambos obedecen al ius puniendi del Estado, pero ello con las debidas matizaciones y adaptaciones en el segundo caso, derivadas de la obvia distinta naturaleza de las causas por delito y de las que solamente tienen un carácter disciplinario sancionador.

Uno de los elementos comunes a ambos procesos y procedimiento es el principio constitucional relativo a la presunción de inocencia, por lo que en el caso que hoy nos ocupa se trata de determinar si ha existido o no un material probatorio de cargo de una entidad tal que sirva para destruir esa presunción en la conducta del recurrente, y en ese aspecto esta Sala entiende procedente la estimación de los argumentos de la sentencia, cuya concisión no está en modo alguno en desacuerdo con la certeza de su contenido, y así la Sala comparte el criterio de la no existencia de prueba de cargo suficiente para justificar la imposición de una sanción, ya que :A) la única prueba practicada que podría revestir entidad suficiente sería el informe del Vigilante [REDACTED] y la exposición de hechos que realiza, pero sobre este informe cabe señalar: 1º) está confeccionado por un funcionario que ha sido parte en la cuestión, y puede tener un concepto o visión que, inconscientemente, esté equivocado o no se ajuste exacta y objetivamente a lo sucedido, y 2º) dicho informe fué ratificado por el otro Vigilante, que no estuvo presente en todo momento, sino que se incorporó a los partícipes ante el elevado tono de voz, sin que, por tanto, presenciare la génesis de los hechos ni participación del Vigilante [REDACTED] en esa génesis, no debiendo olvidarse tampoco que dicho Sr. era su superior jerárquico, por lo que el testimonio del Vigilante subordinado debe ser tomado con la debida prudencia; B) en el expediente administrativo tramitado se omitió un extremo de relevante importancia, que era el de haber preguntado al segundo Vigilante sobre el desarrollo de lo que vió, pues no es suficiente con que ratifique el informe de su Superior, sino que debe ser preguntado sobre los hechos, con las matizaciones y puntualizaciones que sean procedentes para la debida y total aclaración, y ello no se hizo; C) se dice en las actuaciones que había público presente cuando se produjo el incidente, pero no se practica testifical con algún integrante de ese público, que, por su imparcialidad, hubiere sido, sin duda, esclarecedora; sin que sea de apreciar en este sentido la alegación del [REDACTED] de que había en ese momento movimiento y presencia de gente del pueblo en el lugar, pero que no se fijó en ninguno en concreto, pues dado el volumen de población de la localidad y la profesión del



Vigilante, obviamente conocería a todos o casi todos los presentes y pudo designar a alguno como testigo; cosa que no hizo ni él ni el otro Vigilante; D) tampoco puede servir como prueba la declaración de los testigos padre y amigo del actor, debido, de una parte, a hallarse algo alejados, y, de otra, por razones obvias de parentesco y amistad.

En resumen, cabe llegar a la misma conclusión a la que llega la sentencia, derivada de la falta de una verdadera y fehaciente prueba de cargo, por lo que la presunción de inocencia no ha sido destruida, y ello conduce a la confirmación de la sentencia apelada, con la consecuente desestimación de la apelación contra ella interpuesta.

TERCERO.- Que en materia de costas procesales de esta alzada, será procedente su imposición a la parte recurrente, a tenor del art. 139.2 de la LJCA, al haber sido desestimada totalmente la apelación interpuesta y no ser de apreciar circunstancia alguna que justifique la no imposición.

Visto lo expuesto y preceptos citados de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Administración de la Generalitat de Catalunya, contra la sentencia de fecha 31-3-10, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona, en los autos de recurso de tal clase de que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia en todas sus partes, por ser ajustada a Derecho, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución en legal forma, y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

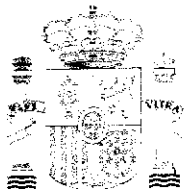
ES COPIA



PUBLICACIÓN

Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente / la Ilma. Sra. Magistrada Ponente estando la Sala celebrando audiencia pública el día 9 de junio de 2.011, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma. Doy fe.

RE. O.P.L.



000000

1/3

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA

PROCEDIMENT ABREUJAT

Actuacions: 230/2008 Secció: C

Part actora: [REDACTED]

Lletrat de la part actora: RAQUEL FERNANDEZ BUSTAMANTE

Part demandada: DEPARTAMENT D'INTERIOR. DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

Lletrat de la part demandada: LLETRAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient administratiu: Expte. disciplinari núm. 55/07-ED. Resolució 20-03-08

SENTÈNCIA NÚM. 134/2010

Barcelona, 31 de març de 2010

Montserrat Figuera Lluch, magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, he vist aquestes actuacions del recurs contenciós administratiu que s'han seguit a instància de [REDACTED] contra DEPARTAMENT D'INTERIOR. DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA .

ANTECEDENTS DE FET

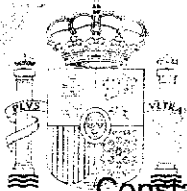
Primer. El senyor [REDACTED] formula recurs contenciós administratiu contra les resolucions de data 20 de març de 2008, del Director General de la Policia, del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya que li imposa una sanció de 16 dies de suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucions corresponents.

Segon. Un cop reclamat l'expedient administratiu, se l'ha sotmès a vista a la part actora per poder fer les al·legacions a l'acte de la vista d'acord amb el que preveu l'article 78 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). Les actuacions han quedat concloses i es mana que es portin a la vista per a sentència.

Tercer. En aquest procediment s'han respectat els tràmits legals.

FONAMENTS DE DRETS

Primer. Diverses són les al·legacions que efectua l'actora en defensa de les pretensions que formula en la pètitia d'aquest recurs. Entre aquestes l'actora nega la realitat dels fets pels quals ha estat sancionat.



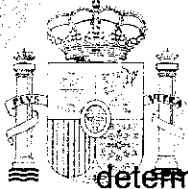
Consta a la relació de fets provats de la resolució sancionadora impugnada que es objecte d'aquest recurs contenciós administratiu que: "El dia 7 de novembre de 2006, el coordinador de vigilants del municipi de [REDACTED] amb número professional 008, juntament amb l'agent del mateix cos amb número 007, correctament uniformats, realitzaven servei de vigilància i control d'estacionament a la zona blava del pàrquing de [REDACTED] de la citada localitat. A les 09:00 ores, aproximadament, varen denunciar el vehicle amb plaques de matrícula [REDACTED] ja que no disposava del corresponent comprovant de control horari.

En aquell moment, una persona de la qual el senyor [REDACTED] en desconeixia l'identitat, i que va resultar ser l'agent del cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, [REDACTED] titular de la targeta d'identitat professional (TIP) número [REDACTED] destinat a la Unitat Regional d'Investigació [REDACTED] el qual es trobava fora de servei, es va apropar als vigilants, i els va manifestar ser el conductor del vehicle que acabaven de denunciar, sol·licitant que aquesta li fos retirada argumentant que era il·legal, que ell era coneixedor de la normativa sancionadora i que els vigilants no tenien competències ni servien per a res.

Davant d'aquests fets, el [REDACTED] va manifestar a l'agent [REDACTED] que estava equivocat, explicant-li que en cas de disconformitat amb la denúncia podia interposar el corresponent recurs, d'acord amb la normativa legal vigent. En aquest punt l'agent [REDACTED] va manifestar-los de manera alterada i amb un to elevat de veu, que era Mosso d'Esquadra i que ningú l'havia de donar lliçons per, acte seguit, treure els seus elements d'acreditació i mostrar-los als vigilants.

Finalment, [REDACTED] mentre obria el seu vehicle per marxar del lloc, va manifestar, textualment i de manera que el va poder escoltar tota la gent que hi havia al lloc "Jo em vaig fer mosso, abans de ser un inútil vigilant com vosaltres, que no serviu per a res", procedint davant d'aquestes manifestacions el senyor [REDACTED] a demanar-li la documentació del vehicle i el permís de conduir, a la qual cosa l'agent [REDACTED] es va negar, manifestant que no li donava cap mena de documentació marxant amb rapidesa del lloc."

A l'acte de la vista d'aquest recurs contenciós administratiu no s'ha practicat prova per la qual cosa la prova de càrrec dels fets sancionats ha de constar a l'expedient administratiu. I d'una anàlisi de la documentació que compona l'expedient administratiu es constata que pel que fa als fets concrets que s'imputen a l'actor i que consistirien en un comportament inadequat envers els vigilants del municipi de [REDACTED] que d'acord amb la resolució objecte d'aquest recurs són constitutius de la falta tipificada com a greu de l'apartat c) de l'article 69 de la Llei 10/1994, d'onze de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, no existeix la necessària prova de càrrec amb entitat suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència que a tot ciutadà reconeix l'article 24 CE. Amb independència d'altres fets i conductes que no es sancionen ni es tracten en l'expedient sancionador en el si del qual s'ha dictat la resolució que es objecte d'aquest recurs contenciós administratiu -i que en el seu cas serien reprobables- la única prova dels fets que es sancionen en la resolució impugnada es la versió que en dóna el vigilant municipal [REDACTED], implicat també en l'incident verbal succeït amb l'actora. L'altre vigilant municipal en la seva declaració durant la tramitació del procediment sancionador manifestà que es trobava al vehicle que hi havia al costat i que es va apropar quan va sentir un to alterat per part del mosso -foli 123 a 125 de l'expedient-, per la qual cosa no



determina en quin moment de l'incident s'hauria aproximat al lloc dels fets, i a més a més en aquesta declaració no reproduïx amb paraules pròpies la conversa i l'incident entre el seu company i l'actor i es limita a ratificar-se en el contingut de l'acta de presa de declaració en les diligències informatives -foli 42 de l'expedient- on -pel que fa als fets de l'incident- només manifesta que els fets que relata el vigilant senyor [redacted] en l'escrit adreçat al regidor de governació de l'Ajuntament que es troben a les diligències informatives són certs. D'altra banda els senyors [redacted] -pare de l'actor- si bé a les seves declaracions afirmen que no van poder escoltar que deien els implicats en l'incident per la seva ubicació en una vorera més allunyada de la carretera que es trobava el costat del pàrquing, manifesten que el vigilant es trobava sol al moment de l'incident -folis 116 a 119 de l'expedient-.

En conseqüència ens trobem doncs amb dues versions contradictòries sobre els fets succeïts sostingudes pels dos implicats en l'incident. Cap d'aquestes dues versions es troba avalada per una prova suficient. Per això i pel que fa al procediment sancionador en el qual es dicta la resolució objecte d'aquest recurs ha de prevaldre el dret a la presumpció d'innocència de l'actor.

Segon. Per tot l'anterior, de conformitat amb el previst per l'article 70.2) de la LJCA procedeix estimar aquest recurs i anul·lar la resolució impugnada així com la sanció imposada a l'actor. No s'aprecia que concorrin les circumstàncies que l'article 139.1 de la LJCA exigeix per efectuar un pronunciament especial pel que fa a les costes processals causades en aquest recurs.

DECISIÓ

Primer. Estimar aquest recurs i anul·lar la resolució impugnada així com la sanció imposada a l'actor.

Segon. No efectuar un pronunciament especial pel que fa a les costes processals causades en aquest recurs.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts comparegudes i feu-los saber que contra la mateixa es pot interposar un recurs d'apel·lació en el termini dels quinze dies següents a la seva notificació.

Així ho dispo, ho mano i ho signo, Montserrat Figuera Lluch, magistrada jutge del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona.

PUBLICACIÓ. La magistrada jutge ha llegit i publicat la sentència anterior el dia de la data en audiència pública. En dono fe.